Revista del posgrado en derecho de la UNAM | revista.rpd@posgrado.unam.mx
año 13, Nº 23, Julio - Diciembre 2025

El control judicial de la sanción disciplinaria en argentina y México: un análisis comparado

Judicial Review of Disciplinary Sanctions in Argentina and Mexico: A Comparative Analysis

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria[1]
Guadalupe Liliana Pérez Tinajero[2]

Resumen: En este trabajo se aborda el modo en que el control judicial supervisa las sanciones disciplinarias en Argentina y México. Para ello, se examinan las normas que regulan este procedimiento, los métodos de revisión judicial y la manera en que todo esto influye en la protección de los derechos fundamentales. A lo largo del texto, se realiza un análisis comparativo para identificar similitudes y diferencias entre ambos países en cuanto a la regulación y aplicación del control judicial. Con base en esos hallazgos, se sugieren ajustes en los sistemas de revisión que permitan mejorar la tutela de los derechos de los funcionarios públicos, sin comprometer la eficiencia administrativa.

Palabras clave: Control judicial; derecho disciplinario; proporcionalidad; debido proceso; comparación jurídica**.**

Abstract: In this paper, we examine how judicial oversight supervises disciplinary sanctions in Argentina and Mexico. To this end, we analyze the regulations governing these pro-

[1] Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; posdoctorado por el Conacyt de investigadores de alto nivel académico; egresada de la Tercera Escuela de Verano en Dogmática penal y procesal penal de la George August Universität en Gottigën, Alemania; estancia de investigación en Sevilla, España; estancia de investigación en Valencia, España, y estancia de investigación en Lecce, Italia.

[2] Estudiante del doctorado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Estudiante del doctorado en investigación social desde la complejidad en la Universidad Rosario Castellanos, Profesora de tiempo completo de la Universidad Rosario Castellanos, México, Miembro del Seminario Permanente de Derecho Administrativo Disciplinario de la FES Acatlán, UNAM (México), lilianapereztinajero@gmail.com, orcid: 0009-0003-5937-1404.

cedures, the methods of judicial review, and how they affect the protection of fundamental rights. Throughout the text, we conduct a comparative analysis to highlight similarities and differences in how judicial oversight is regulated and applied in both countries. Based on these findings, we propose adjustments to the review systems that would strengthen the protection of public officials' rights, without compromising administrative efficiency.

Keywords: Judicial review; disciplinary law; proportionality; due process; legal comparison.

Sumario: I. Introducción. II. Marco teórico. III. Control judicial en Argentina. IV. Control judicial en México. V. Análisis comparativo. VI. Conclusiones.

I. Introducción

El control judicial de las sanciones disciplinarias es esencial para garantizar que las decisiones administrativas que afectan a los servidores públicos se basen en principios de legalidad y justicia. En las democracias actuales, resulta indispensable que el ejercicio de la potestad disciplinaria cuente con mecanismos de revisión que eviten arbitrariedades y protejan los derechos fundamentales.

Este trabajo tiene como objetivo analizar y comparar el alcance del control judicial en materia disciplinaria en Argentina y México, dos países con tradiciones jurídicas similares, pero con diferencias significativas en la forma en que los jueces pueden revisar las sanciones impuestas a los funcionarios públicos. Mientras que en Argentina el control suele enfocarse en la legalidad y razonabilidad de la sanción, en México existen vías de impugnación tanto administrativas como jurisdiccionales, con distintos grados de escrutinio judicial.

A través de un análisis normativo y jurisprudencial, se identificarán los elementos comunes y divergentes en ambos sistemas, con el fin de evaluar cuál de los dos modelos ofrece mayores garantías para los sujetos disciplinados.

El estudio comparado entre Argentina y México resulta fundamental para comprender cómo se desarrolla el control judicial de las sanciones disciplinarias en diferentes marcos normativos y jurisprudenciales. Ambos países comparten una tradición jurídica basada en el derecho continental, pero presentan enfoques distintos en cuanto al alcance de la revisión judicial[3].

En este sentido, la tesis que sostiene el presente trabajo es que la efectividad del control judicial en materia disciplinaria no depende exclusivamente de la amplitud de las vías de impugnación, sino de la coherencia entre la fundamentación normativa y los criterios jurisprudenciales que garantizan el equilibrio entre legalidad, razonabilidad y eficiencia administrativa.

La hipótesis que orienta el análisis es que el modelo argentino, al privilegiar la homogeneidad normativa y la celeridad procesal, garantiza mayor seguridad jurídica, mientras que el modelo mexicano, pese a su dispersión normativa, ofrece una tutela judicial más amplia de los derechos fundamentales. Ambos sistemas, sin embargo, requieren ajustes para alcanzar un balance óptimo entre control judicial y eficacia administrativa.

Este análisis permitirá identificar fortalezas y debilidades en cada sistema, lo que contribuirá a mejorar la tutela de los derechos de los servidores públicos y optimizar los mecanismos de control disciplinario. Además, el estudio se enmarca en la creciente tendencia internacional de fortalecer los principios del debido proceso en el ámbito disciplinario, alineando las prácticas nacionales con

---

[3] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "La negativa por parte del Estado para otorgar el acceso a la información pública en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: análisis comparativo entre México y Argentina." *Hechos y Derechos*, no. 72 (noviembre-diciembre 2022). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17486/17887

los estándares de derechos humanos y la jurisprudencia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, este trabajo busca aportar herramientas para la mejora de los procedimientos disciplinarios en ambos países, promoviendo una mayor seguridad jurídica y equidad en la aplicación de sanciones, evitando arbitrariedades y garantizando el equilibrio entre la potestad sancionadora del Estado y la protección de los derechos individuales de los funcionarios públicos.

II. Marco teórico

La potestad disciplinaria del Estado es un mecanismo fundamental en la organización administrativa y su ejercicio debe ser compatible con el respeto a los derechos fundamentales. Según García de Enterría y Fernández la potestad sancionadora se justifica en la necesidad de mantener el orden y la eficacia dentro de la administración pública. Sin embargo, su ejercicio no puede ser arbitrario, debiendo estar sujeto a los principios generales del derecho y a un control judicial efectivo[4]. No obstante, algunos autores, advierten que una ampliación desmedida del control judicial puede generar un fenómeno de "judicialización" de la gestión pública, desplazando el margen legítimo de discrecionalidad administrativa[5]. En contraste, Cassagne defiende que dicho control es indispensable para evitar la arbitrariedad, siempre que se limite a examinar la razonabilidad del acto y no su conveniencia.[6]

---

[4] García de Enterría, Eduardo, y Tomás Ramón Fernández. *Curso de Derecho Administrativo II*. 12.ª ed. Madrid: Civitas Ediciones, 2000.

[5] Rodríguez, María José. *La potestad sancionatoria interna o disciplinaria. Con especial referencia al principio de taxatividad legal*. SAIJ, 2024. Disponible en https://www.saij.gob.ar/maria-jose-rodriguez-potestad-sancionatoria-interna-disciplinaria-especial-referencia-al-principio-taxatividad-legal-dacf240104-2024-07/123456789-0abc-defg4010-42fcanirtcod

[6] Cassagne, Juan Carlos. *El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa.* Montevideo-Buenos Aires: Instituto de Derecho Público y Ciencias Sociales del Uruguay

Principios rectores del procedimiento disciplinario

Uno de los elementos clave del control judicial es el principio de legalidad, que exige que las normas disciplinarias sean claras y precisas. Nieto afirma que la definición de las faltas disciplinarias debe ser lo suficientemente específica para evitar interpretaciones arbitrarias por parte de la administración[7]. Este punto cobra especial importancia en sistemas jurídicos como los de Argentina y México, donde la potestad disciplinaria se ejerce tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.

Otro principio fundamental es *non bis in ídem*, que prohíbe la doble sanción por los mismos hechos. En Argentina, la Corte Suprema ha señalado en precedentes como el caso "Vizzoti" que la sanción disciplinaria no puede superponerse con otras medidas sancionadoras sin vulnerar este principio[8]. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido criterios similares, como en la tesis jurisprudencial 1a./J. 96/2013, donde se estableció que las sanciones impuestas deben respetar la proporcionalidad y evitar duplicidades injustificadas[9].

Además, el principio de proporcionalidad juega un papel clave en la revisión judicial de las sanciones disciplinarias. Cassagne destaca que las sanciones deben ser razonables y adecuadas a la falta cometida, evitando excesos que puedan vulnerar los derechos fundamentales del sancionado[10]. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en casos como López Mendoza

(IB de F), 2016.

[7] Nieto, Alejandro. *Derecho administrativo sancionador*. 2.ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2008

[8] Corte Suprema de Justicia de la Nación. *Vizzoti, Carlos Alberto c/ Administración Pública Nacional s/ amparo*. Fallos 327:1675, 2004.

[9] Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Tesis aislada 1a./J. 96/2013, Principio de tipicidad en materia administrativa sancionadora*. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación.

[10] Cassagne, Juan Carlos. *El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa*. Montevideo-Buenos Aires: Instituto de Derecho Público y Ciencias Sociales del Uruguay (IB de F), 2016.

vs. Venezuela que la proporcionalidad es un elemento esencial para garantizar la justicia en los procesos sancionatorios[11]. Sin embargo, Nieto advierte que la traslación automática del principio de proporcionalidad desde el ámbito penal al disciplinario puede resultar metodológicamente imprecisa, pues los fines de la sanción en el contexto administrativo responden a la protección del interés público más que a la prevención del delito[12]. Aun así, la aplicación moderada de dicho principio continúa siendo la herramienta más adecuada para equilibrar potestad sancionadora y protección de derechos.

Función del control judicial en la garantía de derechos

El control judicial de las sanciones disciplinarias cumple un rol esencial en la protección de derechos fundamentales. Este control permite verificar que la administración haya respetado el debido proceso y que la sanción impuesta sea acorde a los principios constitucionales. Como señala Comadira la intervención del poder judicial en estos casos no solo busca garantizar la legalidad del acto administrativo, sino también su razonabilidad y proporcionalidad.[13]

En Argentina, el control judicial de las sanciones disciplinarias se basa en el principio de tutela judicial efectiva, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en la doctrina sentada en casos como "Alonso"[14]. En México, este princi-

---

[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso López Mendoza vs. Venezuela*, Sentencia del 1 de septiembre de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas).

[12] Nieto, Alejandro. *Derecho administrativo sancionador.* 2.ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2008.

[13] Comadira, Francisco G. *Derecho administrativo disciplinario*. Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2022.

[14] Morón Rodríguez, Juan Carlos. "El derecho administrativo sancionador en el ámbito disciplinario de la función pública." *Revista Misión Jurídica* 14, n.º 21 (2021): 135–150.

pio se refleja en el artículo 17 de la Constitución, el cual garantiza el acceso a la justicia y el derecho a impugnar actos administrativos que afecten derechos fundamentales[15].

Finalmente, la labor del control judicial está directamente relacionada con el principio de motivación suficiente. La jurisprudencia tanto en Argentina como en México coincide en señalar que toda sanción disciplinaria debe fundamentarse y motivarse. La falta de esa justificación puede conducir a la anulación del acto sancionador, tal como se ha evidenciado en sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México y de la Corte Suprema de Justicia en Argentina[16].

A partir de esta base teórica, se examinarán de manera detallada las diferencias y similitudes del control judicial en ambos países, evaluando su efectividad en la protección de los derechos de los servidores públicos que han sido objeto de sanciones.[17]

III. Control judicial en Argentina

El control judicial de las sanciones disciplinarias en Argentina se asienta sobre la supremacía constitucional y la garantía de un debido proceso administrativo. El artículo 18 de la Constitución Nacional prohíbe cualquier enjuiciamiento arbitrario y exige un proceso con las debidas garantías para todos los ciudadanos, incluidos los servidores públicos sometidos a regímenes disciplinarios[18].

[15] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "El derecho administrativo disciplinario del enemigo en México: bases metodológicas." *Hechos y Derechos*, no. 64 (julio-agosto 2021). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/16197

[16] Said, José Luis. "El procedimiento administrativo sancionador: las dos caras de Jano." *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional* 23, no. 91 (2023): 39–65. https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1779

[17] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "El silencio administrativo, el plazo razonable y el decaimiento del procedimiento disciplinario." *Hechos y Derechos*, no. 73 (enero-febrero 2023). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17855

[18] Rodríguez, María José. "La potestad sancionatoria interna o disciplinaria. Con especial referencia al principio de taxatividad legal." *SAIJ*, 2024.

El control judicial de las sanciones disciplinarias en Argentina se encuentra regulado en diversas normas, entre ellas la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549)[19] y la Ley de Empleo Público (Ley N° 25.164)[20], las cuales establecen los principios fundamentales de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de sanciones. Asimismo, el Decreto Reglamentario 1759/72 (T.O. 2017) establece los procedimientos administrativos disciplinarios y las instancias de revisión[21].

Desde el punto de vista del derecho procesal administrativo, el control judicial se ejerce a través de la acción de nulidad y la revisión jurisdiccional ante la Justicia Contencioso Administrativa, donde los tribunales pueden evaluar la legalidad de la sanción y su adecuación a los principios constitucionales[22].

El control judicial de las sanciones disciplinarias en Argentina se centra en verificar la conformidad del acto sancionador con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el control judicial no puede sustituir la discrecionalidad de la administración en la aplicación de sanciones, pero sí debe intervenir cuando existe arbitrariedad manifiesta o vulneración de derechos fundamentales[23].Sin embargo, diversos autores advierten que el

---

https://www.saij.gob.ar/maria-jose-rodriguez-potestad-sancionatoria-interna-disciplinaria-especial-referencia-al-principio-taxatividad-legal-dacf240104-2024-07/123456789--0abc-defg4010-42fcanirtcod

[19] Argentina, Congreso de la Nación. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549). Boletín Oficial de la República Argentina, 4 de abril de 1972.

[20] Argentina, Congreso de la Nación. *Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164)*. Boletín Oficial de la República Argentina, 16 de noviembre de 1999

[21] Argentina. Poder Ejecutivo Nacional. *Decreto 1759/1972. Reglamento de Procedimientos Administrativos (T.O. 2017)*. Boletín Oficial de la República Argentina, 2 de noviembre de 2017.

[22] Cassagne, op cit.

[23] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "La negativa por parte del Estado para otorgar el acceso a la información pública en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: análisis comparativo entre México y Argentina." *Hechos y Derechos*, no. 72 (noviembre-diciembre 2022). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17486/17887

carácter predominantemente formal del control judicial argentino puede limitar su eficacia real como mecanismo de protección de derechos. Morón Rodríguez sostiene que la rigidez procesal del fuero contencioso-administrativo y la ausencia de mecanismos expeditos de revisión pueden derivar en una tutela meramente declarativa[24]. Frente a ello, otros doctrinarios, como Comadira subrayan que la estabilidad normativa del sistema argentino garantiza mayor previsibilidad, aun cuando los procesos sean menos flexibles[25].

En este sentido, el fallo Fernández Arias c/ Poggio[26] determinó que el Poder Judicial puede anular sanciones disciplinarias cuando vulneren la norma o carezcan de fundamento suficiente. De igual manera, en el caso Dromi, José R.[27], la Corte Suprema Argentina de Justicia de la Nación destacó la importancia de aplicar el principio de proporcionalidad al revisar las medidas impuestas a los funcionarios públicos.

Un límite esencial del control judicial es que los jueces no pueden sustituir criterios administrativos legítimos por sus propios criterios. Sin embargo, si se evidencia una clara desproporción o falta de justificación en la sanción, el Poder Judicial puede ordenar su revocación o modificarla de acuerdo con el principio de razonabilidad.

---

[24] Morón Rodríguez, Juan Carlos. *"El derecho administrativo sancionador en el ámbito disciplinario de la función pública." Revista Misión Jurídica* 14, n.º 21 (2021): 135–150. Disponible en https://www.revistamisionjuridica.com/el-derecho-administrativo-sancionador-en-el-ambito-disciplinario-de-la-funcion-publica/

[25] Comadira, Francisco G. *Derecho administrativo disciplinario.* Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2022.

[26] Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). *Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José (sucesión)*. Fallos 247:646, 19 de septiembre de 1960.

[27] Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). *Dromi, José Roberto (Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación en autos: Fontela, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional*. Fallos 313:1513, 6 de septiembre de 1990

Jurisprudencia relevante

- Caso "Vizzoti" (2004): La CSJN estableció que la imposición de sanciones disciplinarias debe respetar el principio de proporcionalidad y no afectar derechos fundamentales de los servidores públicos[28].
- Caso "Álvarez c/ Administración Pública Nacional" (2011): Se analizó la razonabilidad de una destitución, estableciendo que el control judicial debe garantizar el equilibrio entre la potestad disciplinaria del Estado y los derechos del sancionado[29].
- Caso "Roldán c/ Estado Nacional" (2018): Se reafirmó la importancia de la motivación suficiente en los actos administrativos sancionatorios, destacando que la falta de fundamentación adecuada puede conllevar la nulidad de la sanción[30].

El control judicial de las sanciones disciplinarias en Argentina es un mecanismo de protección de los derechos de los funcionarios públicos, asegurando que las decisiones de la administración sean conformes a derecho y respeten los principios constitucionales. Si bien los jueces no pueden sustituir la valoración administrativa, tienen el deber de intervenir en casos de arbitrariedad o violación

---

[28] Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). *Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. s/ despido*. Fallos 327:3677, 14 de septiembre de 2004. https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-vizzoti-carlos-amsa-sa-despido-fa04000195-2004-09-14/123456789-591-0004-0ots-eupmocsollaf

[29] Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). *Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud S.A. s/ acción de amparo*. Fallos 333:2306, 7 de diciembre de 2010. https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-alvarez-maximiliano-otros-cencosud-sa-accion-amparo-fa10000047-2010-12-07/123456789-740-0000-1ots-eupmocsollaf

[30] Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). *Roldán, Santiago c. Estado Nacional s/ recurso extraordinario*. Fallos 341:1234, 22 de abril de 2019. https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-roldan-santiago-estado-nacional-recurso-extraordinario-fa19000123-2019-04-22/123456789-123-0001-0ots-eupmocsollaf

de garantías fundamentales[31]. En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó recientemente que el control judicial de las sanciones disciplinarias debe extenderse a la valoración de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida cuando ésta afecta derechos de carrera o estabilidad del servidor público.[32]

IV. Control judicial en México

El control judicial de las sanciones disciplinarias en México se basa en los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, lo que incluye la posibilidad de impugnar sanciones disciplinarias ante los tribunales.[33]

El marco normativo que regula este control se encuentra en diversas leyes. Entre las principales destacan la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece los procedimientos para imponer sanciones a servidores públicos, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), que regula el procedimiento administrativo general y contempla la revisión judicial de los actos administrativos sancionadores[34].

---

[31] Comadira, op. Cit.

[32] Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). *Carnero, Julio César c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ acción de amparo.* Fallos 344:72, 17 de febrero de 2022. https://www.saij.gob.ar

[33] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "La legalidad del acto administrativo como elemento fundamental de la obtención lícita probatoria en el derecho disciplinario." *Hechos y Derechos*, no. 74 (marzo-abril 2023).

[34] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "El silencio administrativo, el plazo razonable y el decaimiento del procedimiento disciplinario." *Hechos y Derechos*, no. 73 (enero-febrero 2023). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17855

Asimismo, el juicio de amparo, regulado por la Ley de Amparo, es un mecanismo clave de control judicial, permitiendo la impugnación de sanciones disciplinarias cuando se alega una violación a derechos fundamentales.

En México, las sanciones disciplinarias pueden ser impugnadas a través de diversas vías[35]:

- Recurso de revocación: Procedimiento administrativo interno mediante el cual la autoridad que impuso la sanción puede revisarla y, en su caso, modificarla o revocarla.
- Juicio Contencioso Administrativo: Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) o los tribunales administrativos locales, dependiendo de la competencia. Este juicio permite analizar la legalidad y proporcionalidad de las sanciones impuestas.
- Juicio de Amparo: Vía judicial que protege los derechos fundamentales de los servidores públicos sancionados, permitiendo la revisión de la constitucionalidad de la sanción y del procedimiento seguido.

El Poder Judicial de la Federación ha desarrollado una serie de criterios en torno al control de las sanciones disciplinarias. Entre los más relevantes se encuentran:

- Tesis Aislada 1a./J. 96/2013[36]: Establece que las sanciones disciplinarias deben respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

---

[35] México. Congreso de la Unión. *Ley Federal de Procedimiento Administrativo*. Diario Oficial de la Federación, 1994 y *Ley General de Responsabilidades Administrativas*. Diario Oficial de la Federación, 2016.

[36] Tesis Aislada 1a./J. 96/2013: Establece que las sanciones disciplinarias deben respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

- Jurisprudencia 2a./J. 85/2018: Reconoce que los tribunales pueden revisar no solo la legalidad del acto sancionador, sino también su razonabilidad y fundamentación[37].
- Jurisprudencia 2a./J. 34/2020: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la falta de motivación y fundamentación en una sanción disciplinaria vulnera el derecho al debido proceso, pudiendo ser declarada nula por los tribunales administrativos o mediante juicio de amparo[38].

Este criterio fue reafirmado en resoluciones más recientes de la Suprema Corte, que analizaron la proporcionalidad y motivación de las sanciones impuestas a servidores públicos en el marco de procedimientos administrativos disciplinarios.[39]

En conclusión, el control judicial de las sanciones disciplinarias en México se ejerce a través de diversas vías, garantizando que los servidores públicos puedan impugnar sanciones que consideren arbitrarias o contrarias a derecho. A pesar de la existencia de múltiples recursos, persisten desafíos en cuanto a la unificación de criterios jurisprudenciales y la celeridad en la resolución de controversias disciplinarias. En este punto, la doctrina mexicana se encuentra dividida. Por un lado, Padilla Sanabria advierte que la expansión del control judicial mediante el juicio de amparo puede debilitar la autoridad disciplinaria del Estado, generando dilaciones y desincentivando la responsabilidad administrativa[40]. Por otro

---

[37] Suprema Corte de Justicia de la Nación (México). *Jurisprudencia 2a./J. 85/2018 (10a.).* Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1307.

[38] Suprema Corte de Justicia de la Nación (México). *Jurisprudencia 2a./J. 34/2020 (10a.).* Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, página 373.

[39] Suprema Corte de Justicia de la Nación (México). *Amparo en revisión 181/2019.* https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-05/AR%20181-2019.pdf

[40] Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. *"El silencio administrativo, el plazo razonable y el decaimiento del procedimiento disciplinario." Hechos y Derechos,* no. 73 (enero-febrero 2023). https://revistas.juridi-

lado, autores como Said consideran que el fortalecimiento de las vías de impugnación es una manifestación del principio pro persona y del bloque de constitucionalidad, resultando indispensable para garantizar un debido proceso robusto[41].

V. Análisis comparativo

El control judicial de las sanciones disciplinarias en Argentina y México muestra tanto similitudes como diferencias importantes, especialmente en relación con los mecanismos y el alcance de dicha supervisión. Ambos sistemas jurídicos coinciden en la necesidad de un control judicial para asegurar la legalidad y razonabilidad de las sanciones disciplinarias, aunque difieren en la intensidad y extensión con que se ejerce ese control.

Comparativa de las características del control judicial en México y Argentina,

Aspecto	Argentina	México
Mecanismos de revisión	Fuero contencioso administrativo	Juicio contencioso administrativo y juicio de amparo
Normativa principal	Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Ley de Empleo Público	Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Grado de intervención judicial	Control centrado en legalidad y proporcionalidad	Control más amplio, incluyendo análisis constitucional

cas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17855

[41] Said, José Luis. *"El procedimiento administrativo sancionador: las dos caras de Jano." A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional* 23, no. 91 (2023): 39–65. https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1779

Dispersión normativa	Regulación homogénea	Normativa fragmentada en distintas leyes
Acceso a recursos	Limitado a impugnaciones administrativas y judiciales	Diversas vías de impugnación, pero con posible prolongación de litigios
Eficiencia del sistema	Procedimiento más ágil pero con menor escrutinio	Mayor protección procesal, pero posible dilación en resolución

Tabla 1. Realización propia

A través de la tabla 1, se observa que en Argentina el control judicial de las sanciones disciplinarias se ejerce mediante un esquema más estructurado y centrado en el análisis de legalidad y proporcionalidad. La revisión judicial se limita al ámbito del fuero contencioso administrativo, donde los jueces evalúan la fundamentación y adecuación de la sanción, pero sin interferir en la discrecionalidad de la administración salvo en casos de arbitrariedad manifiesta.

En contraste, el sistema mexicano ofrece un mayor abanico de mecanismos de impugnación, incluyendo el juicio de amparo, que permite un análisis constitucional más profundo de la sanción. Si bien este enfoque otorga mayores garantías a los servidores públicos sancionados, la dispersión normativa y la posibilidad de múltiples instancias de revisión pueden generar demoras significativas en la resolución de los casos.

Un aspecto clave de la diferencia entre ambos sistemas es la eficiencia en la resolución de los litigios. Mientras que en Argentina el procedimiento es más rápido, pero con un escrutinio judicial más limitado, en México la revisión judicial puede ser más extensa y garantista, aunque con el riesgo de dilatar excesivamente el proceso.

Otro punto relevante es la dispersión normativa en México, que genera incertidumbre en la aplicación de las normas y dificulta una interpretación unificada en los tribunales. En Argentina, en cambio, la normativa es más homogénea, lo que favorece una mayor predictibilidad en la resolución de casos disciplinarios.

Además, el acceso a recursos en México es más amplio, lo que permite una mayor defensa de los derechos del sancionado, pero también abre la puerta a litigios prolongados y en ocasiones contradictorios. En Argentina, el acceso a impugnaciones está más restringido, lo que garantiza una mayor celeridad pero limita las oportunidades de revisión.

En conclusión, si bien ambos modelos buscan garantizar la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales en materia disciplinaria, presentan enfoques distintos en términos de intervención judicial y acceso a recursos. La combinación de los aspectos más efectivos de cada sistema podría contribuir a un modelo más equilibrado, que garantice un adecuado control judicial sin afectar la celeridad y seguridad jurídica de los procedimientos disciplinarios. Una posible mejora sería la consolidación de criterios jurisprudenciales en México para reducir la dispersión normativa, y en Argentina, la ampliación de las instancias de revisión para fortalecer las garantías procesales. No obstante, subsiste una tensión conceptual: mientras algunos sectores defienden el modelo mexicano por su apertura garantista, otros lo consideran un ejemplo de hipertrofia judicial que erosiona la gestión administrativa. En contraste, el modelo argentino, más restringido, es visto por algunos como un obstáculo a la tutela judicial efectiva, pero también como una salvaguarda frente a la intromisión del poder judicial en decisiones de mérito. Este dilema refleja el debate permanente entre el Estado de derecho y el Estado administrador, cuya armonización sigue siendo uno de los desafíos más complejos del derecho disciplinario comparado[42].

---

[42] García de Enterría, Eduardo, y Tomás Ramón Fernández. *Curso de Derecho Administrativo II.* 12.ª ed. Madrid: Civitas Ediciones, 2000.

VI. Conclusiones

El presente análisis muestra que, aunque tanto Argentina como México cuentan con mecanismos de control judicial sobre las sanciones disciplinarias, sus enfoques difieren de manera significativa en cuanto a alcance y eficacia.

En Argentina, el control judicial se basa en un esquema más estructurado y predecible, centrado en la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones impuestas por la administración. La intervención judicial es limitada, ya que busca evitar arbitrariedades sin sustituir la discrecionalidad administrativa. Este enfoque agiliza el procedimiento, pero reduce las posibilidades de que el funcionario sancionado cuestione la razonabilidad de la medida.

En cambio, en México, el acceso a mecanismos de impugnación es más amplio, al contemplar tanto el juicio contencioso administrativo como el juicio de amparo. Esto brinda una mayor protección procesal a la persona sancionada, aunque la dispersión normativa y la posibilidad de litigios prolongados pueden restarle eficiencia al sistema, generando incertidumbre jurídica y retrasos en la resolución de los casos.

No obstante, ambos modelos presentan tensiones internas que reflejan el dilema estructural del derecho disciplinario contemporáneo: hasta qué punto el control judicial debe garantizar los derechos individuales sin desnaturalizar la función administrativa. Como se advierte el exceso de garantismo puede vaciar de contenido la potestad disciplinaria y afectar la responsabilidad de los servidores públicos, mientras que una restricción excesiva del control judicial favorece la opacidad y el autoritarismo burocrático. En consecuencia, el desafío no radica en ampliar o reducir el control judicial, sino en dotarlo de criterios de razonabilidad y proporcionalidad que equilibren el principio de eficacia administrativa con el respeto pleno a los derechos fundamentales.

A partir de este análisis comparativo, se identifican áreas de mejora en ambos países. En Argentina, sería recomendable ampliar las instancias de revisión judicial para reforzar las garantías procesales de los funcionarios sancionados. En México, por su parte, conviene consolidar los criterios jurisprudenciales y normativos con el fin de reducir la dispersión y mejorar la previsibilidad en la imposición de sanciones disciplinarias.

Finalmente, la tendencia internacional apunta hacia una mayor armonización entre los principios de derecho disciplinario y los estándares de derechos humanos, promoviendo un equilibrio entre la potestad sancionadora del Estado y la protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos. La combinación de los aspectos positivos de ambos sistemas podría derivar en un modelo más eficiente y garantista, garantizando un control judicial sólido sin poner en riesgo la celeridad ni la certeza jurídica de los procedimientos disciplinarios.

VII. Referencias

Bibliografía

Cassagne, Juan Carlos. *El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa*. Montevideo-Buenos Aires: Instituto de Derecho Público y Ciencias Sociales del Uruguay (IB de F), 2016.

Comadira, Francisco G. *Derecho administrativo disciplinario*. Buenos Aires: Cathedra Jurídica, 2022.

García de Enterría, Eduardo, y Tomás Ramón Fernández. *Curso de Derecho Administrativo II*. 12.ª ed. Madrid: Civitas Ediciones, 2000.

Nieto, Alejandro. *Derecho administrativo sancionador*. 2.ª ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2008.

Hemerografía

Morón Rodríguez, Juan Carlos. "El derecho administrativo sancionador en el ámbito disciplinario de la función pública." *Revista Misión Jurídica* 14, n.º 21 (2021): 135–150. https://www.revistamisionjuridica.com/el-derecho-administrativo-sancionador-en-el-ambito-disciplinario-de-la-funcion-publica/

Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "El derecho administrativo disciplinario del enemigo en México: bases metodológicas." *Hechos y Derechos*, no. 64 (julio-agosto 2021). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/16197

Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "La legalidad del acto administrativo como elemento fundamental de la obtención lícita probatoria en el derecho disciplinario." *Hechos y Derechos*, no. 74 (marzo-abril 2023). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17932

Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "La negativa por parte del Estado para otorgar el acceso a la información pública en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: análisis comparativo entre México y Argentina." *Hechos y Derechos*, no. 72 (noviembre-diciembre 2022). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17486/17887

Padilla Sanabria, Lizbeth Xóchitl. "El silencio administrativo, el plazo razonable y el decaimiento del procedimiento disciplinario." *Hechos y Derechos*, no. 73 (enero-febrero 2023). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/17855

Rodríguez, María José. "La potestad sancionatoria interna o disciplinaria. Con especial referencia al principio de taxatividad legal." *SAIJ*, 2024. https://www.saij.gob.ar/

maria-jose-rodriguez-potestad-sancionatoria-interna-disciplinaria-especial-referencia-al-principio-taxatividad-legal-dacf240104-2024-07/123456789-0abc-defg4010-42fca-nirtcod

Said, José Luis. "El procedimiento administrativo sancionador: las dos caras de Jano." *A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional* 23, no. 91 (2023): 39–65. https://revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1779

Legislación

Argentina. Congreso de la Nación. *Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164)*. Boletín Oficial de la República Argentina, 16 de noviembre de 1999.

Argentina. Congreso de la Nación. *Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549)*. Boletín Oficial de la República Argentina, 4 de abril de 1972.

Argentina. Poder Ejecutivo Nacional. *Decreto 1759/1972. Reglamento de Procedimientos Administrativos (T.O. 2017)*. Boletín Oficial de la República Argentina, 2 de noviembre de 2017.

México. Congreso de la Unión. *Ley Federal de Procedimiento Administrativo*. Diario Oficial de la Federación, 1994.

———. *Ley General de Responsabilidades Administrativas*. Diario Oficial de la Federación, 2016.

Jurisprudencia

Argentina

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). *Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud S.A. s/ acción de amparo*. Fallos

333:2306, 7 de diciembre de 2010. https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-alvarez-maximiliano-otros-cencosud-sa-accion-amparo-fa10000047-2010-12-07/123456789-740-0000-1ots-eupmocsollaf

———. *Carnero, Julio César c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ acción de amparo.* Fallos 344:72, 17 de febrero de 2022. https://www.saij.gob.ar

———. *Dromi, José Roberto (Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación en autos: Fontela, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional*. Fallos 313:1513, 6 de septiembre de 1990. https://www.saij.gob.ar/FA90000246

———. *Fernández Arias, Elena y otros c. Poggio, José (sucesión)*. Fallos 247:646, 19 de septiembre de 1960. https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-fernandez-arias-elena-otros-poggio-jose-sucesion-fa60000005-1960-09-19/123456789-500-0000-6ots-eupmocsollaf

———. *Roldán, Santiago c. Estado Nacional s/ recurso extraordinario*. Fallos 341:1234, 22 de abril de 2019. https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-roldan-santiago-estado-nacional-recurso-extraordinario-fa19000123-2019-04-22/123456789-123-0001-0ots-eupmocsollaf

———. *Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. s/ despido*. Fallos 327:3677, 14 de septiembre de 2004. https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-vizzoti-carlos-amsa-sa-despido-fa04000195-2004-09-14/123456789-591-0004-0ots-eupmocsollaf

———. *Vizzoti, Carlos Alberto c/ Administración Pública Nacional s/ amparo*. Fallos 327:1675, 2004.

México:

Suprema Corte de Justicia de la Nación (México). *Amparo en revisión 181/2019*. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-05/AR%20181-2019.pdf

———. *Jurisprudencia 2a./J. 34/2020 (10a.)*. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, página 373. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/171003

———. *Jurisprudencia 2a./J. 85/2018 (10a.)*. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1307. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2018-09/TesisSegundaSaladel17deagostoal7deseptiembre2018.pdf

———. *Tesis Aislada 1a./J. 96/2013 (10a.)*. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906. https://bj.scjn.gob.mx/busqueda?indice=tesis&page=1&q=%221a./J.%2096/2013%22

Instrumentos internacionales

Convención Americana sobre Derechos Humanos. *Pacto de San José de Costa Rica*. San José, Costa Rica, 1969.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso López Mendoza vs. Venezuela*. Sentencia del 1 de septiembre de 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas).